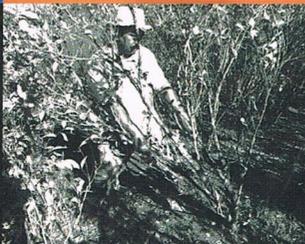




DANIEL FONSECA
ÓMAR GUTIÉRREZ
ANDERS RUDQVIST

**Cultivos de uso ilícito
en el sur de Bolívar:**
aproximación desde
la economía política





¿Es posible crear condiciones para cimentar un proceso de construcción de lo público en regiones afectadas simultáneamente por la presencia de cultivos ilícitos y un intenso conflicto armado?

Sobre la base de un proceso de diálogo con las comunidades afectadas, los gremios y las instituciones públicas y privadas locales, este estudio busca responder una pregunta que como esta es hoy fundamental para la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano en Colombia.



Colombia

Tabla de CONTENIDO

LISTA DE ACRÓNIMOS	12
PRESENTACIÓN	15
SOBRE LOS AUTORES	19
INTRODUCCIÓN	21
SUPUESTOS	23
Revisión de los planteamientos de la propuesta	25
APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS	29
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO	31
Minería en el sur de Bolívar	38
Reserva forestal del río Magdalena	41
Reservas campesinas en el sur de Bolívar	42
Medio ambiente	45

PERCEPCIONES DE LAS COMUNIDADES EN TORNO AL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROBLEMÁTICA DE LA COCA	47
La tierra	47
Institucionalidad y organización social	47
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	48
Valores de los campesinos	49
Crédito e incentivos al agro	49
Generación de empleo e ingresos	50
Infraestructura social y servicios públicos	50
Vías y mercados	51
CULTIVOS DE COCA EN EL AREA DE ESTUDIO	53
ANÁLISIS DE ACTORES IMPLICADOS	59
Supuestos del análisis de actores implicados	59
Los pequeños cultivadores de coca	61
Trabajadores de las plantaciones de coca	66
Comerciantes y transportadores	69
Traficantes de precursores químicos	72
Pequeños y medianos productores	73
Los "empresarios" locales de la coca	76
Grupos armados ilegales	77
El Ejército de Liberación Nacional - ELN	78
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC-EP	79
Las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC	81
Los gobiernos locales	82
Las ONG y la intervención institucional	83
LA ECONOMÍA COCALERA Y LA ECONOMÍA AGRARIA	87
EL CIRCUITO DE LA COCA	91
Principales características del circuito de la coca	95

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA COCA EN EL SUR DE BOLIVAR	101
<hr/>	
DESCENTRALIZACIÓN, DEMOCRACIA Y CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO	107
La elección popular de alcaldes y la participación ciudadana	110
<hr/>	
LÍNEAS PROGRAMÁTICAS	115
Tenencia y legalización de la tierra	116
Institucionalidad y organización social	118
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	121
Adecuación de sistemas de producción y organización campesina	126
<hr/>	
SUSTITUIR LA DEPENDENCIA DE LOS FLUJOS DE CAJA DE LA COCA	129
Sostenibilidad y recuperación ambiental	129
<hr/>	
UBICACIÓN DEL PROBLEMA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO	131
Los momentos para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos	133
Estrategias puestas en marcha en el <i>segundo momento</i>	135
Campaña de incentivos morales y ético-políticos	135
Espacios humanitarios	136
Fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad local	137
Economía campesina moderna	137
Minería de la Serranía de San Lucas	139
La infraestructura vial	139
El proceso de paz	139
<hr/>	
CONCLUSIONES	141
<hr/>	
ANEXO 1	
Metodología	147

ANEXO 2

Guía para las entrevistas individuales con actores clave	157
--	-----

ANEXO 3

Guía para las entrevistas en grupo	161
------------------------------------	-----

BIBLIOGRAFÍA

165

MAPAS

Mapa 1	Localización de la zona de estudio	32
Mapa 2	Zonas mineras en el sur de Bolívar	40
Mapa 3	Reserva forestal del Magdalena, sector del sur de Bolívar	43
Mapa 4	Presencia de cultivos de coca en el sur de Bolívar	57

TABLAS

Tabla 1	Datos de fundación y creación de municipios del sur de Bolívar	33
Tabla 2	Aumento de la población total de los municipios del sur de Bolívar	33
Tabla 3	Índice de necesidades básicas insatisfechas en los principales municipios del sur de Bolívar	34
Tabla 4	Índice de calidad de vida (ICV) en los principales municipios del sur de Bolívar	34
Tabla 5	Monitoreo de población en situación de desplazamiento. Municipios de llegada en el sur de Bolívar	36
Tabla 6	Áreas de reserva especial	41
Tabla 7	Distribución del territorio municipal en la reserva forestal del Magdalena en el departamento de Bolívar	42

Tabla 8	Área de cultivos de uso ilícito de coca en los municipios del sur de Bolívar. Censo de noviembre de 2001	54
Tabla 9	Extensión de los cultivos de coca en el sur de Bolívar	56
Tabla 10	Características comparativas de las economías agrarias en el sur de Bolívar	89
Tabla 11	Costos de instalación y mantenimiento de una hectárea de coca	103
Tabla 12	Principales biocidas y fertilizantes empleados en el cultivo de coca	103
Tabla 13	Costos para la segunda raspa y el procesamiento de la hoja	104
Tabla 14	Costos de mantenimiento de una hectárea de coca a partir de la segunda raspa	105
Tabla 15	Ingresos municipales de algunos municipios del sur de Bolívar y del Valle del Río Cimitarra	113
Tabla 16	Ingresos municipales propios de algunos municipios del sur de Bolívar y del Valle del Río Cimitarra	113

Lista de ACRÓNIMOS

ACVC	Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
AGROS	Corporación para el Desarrollo Rural Sostenible
AMPSA	Alianza Municipal de Pequeños Agricultores de la Seguridad Alimentaria
ARD	Asociación para el Desarrollo Rural
ASDI	Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo
ASOCALIMA	Asociación de Pequeños Productores de Fríjol Calima
ASOCIPAZ	Asociación Civil por la Paz
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
BIP	Brigadas Internacionales de Paz
CAR	Corporación Autónoma Regional
CDPMM	Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
CODHES	Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado
CORPOICA	Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
CORPOTEC	Corporación Técnica de Santa Rosa del Sur
CREDHOS	Corporación Regional para los Derechos Humanos
CSB	Corporación Autónoma Regional de sur de Bolívar
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DDHH	Derechos Humanos
DIH	Derecho Internacional humanitario
ECOPETROL	Empresa Colombiana de Petróleos

ELN	Ejército de Liberación Nacional
FARC-EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
FIP	Fondo de Inversiones para la Paz
FUPAD	Fundación Panamericana para el Desarrollo
IDEADE	Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
IDEMA	Instituto de Mercadeo Agropecuario
IGAC	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
INCODER	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
Incora	Instituto Colombiano de Reforma Agraria
INDH	Informe Nacional de Desarrollo Humano
MINERCOL	Empresa Minera Colombiana
OFF	Organización Femenina Popular
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
PDPMM	Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
PLANTE	Plan Nacional de Desarrollo Alternativo
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SIMCI	Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
WWF	World Wild Foundation
ZRC	Zona de Reserva Campesina

ELN	Ejército de Liberación Nacional
FARC-EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
FIP	Fondo de Inversiones para la Paz
FUPAD	Fundación Panamericana para el Desarrollo
IDEADE	Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
IDEMA	Instituto de Mercadeo Agropecuario
IGAC	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
INCODER	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
Incora	Instituto Colombiano de Reforma Agraria
INDH	Informe Nacional de Desarrollo Humano
MINERCOL	Empresa Minera Colombiana
OFF	Organización Femenina Popular
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
PDPMM	Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
PLANTE	Plan Nacional de Desarrollo Alternativo
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SIMCI	Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
WWF	World Wild Foundation
ZRC	Zona de Reserva Campesina

Presentación

En la estrategia de cooperación del gobierno de Suecia con Colombia se plantean grandes retos en torno a la búsqueda de alternativas para la solución del conflicto interno, los cuales se orientan a reducir los factores que dificultan avanzar en la búsqueda y consolidación del desarrollo del país.

Entre los problemas más representativos del conflicto colombiano se han reconocido como los más importantes la distribución desigual del poder político y económico, el incremento de los niveles de pobreza, la débil institucionalidad democrática, la impunidad, las violaciones a los derechos humanos, la distribución desigual de la tierra y el narcotráfico; este último con altos costos sociales, económicos, ambientales y políticos que alimentan día tras día el círculo vicioso del conflicto.

En términos generales, el narcotráfico ha surgido y se ha fomentado a expensas de un sector de la población fundamentalmente rural, y se ha alimentado de procesos históricos de colonización en regiones del país con características comunes de aislamiento geográfico, enorme riqueza ambiental y paisajística y, por supuesto, con enormes dificultades para que el Estado colombiano haga una presencia efectiva.

Las formas para combatir tan complejo problema se han centrado en la erradicación forzosa mediante fumigación aérea y la promoción de programas de desarrollo alternativo concebidas sin tener en cuenta las características de las regiones donde se implementan, razón por la cual no han sido efectivas para la obtención de resultados contundentes en la disminución de los cultivos ilícitos ni para promover el desarrollo de las regiones donde éstos se han establecido históricamente. Puede decirse que estas estrategias han sido desarrolladas para poner fin a un problema cuyo origen se justifica principalmente en la participación y vinculación de colonos y campesinos que se dedican al cultivo de la coca, lo cual ha implicado profundas transformaciones en su estructura social, modos de vida y costumbres, y ha dificultado y afectado procesos de consolidación y construcción de arraigo, entre otros.

El estudio que aquí se presenta no se concibe como una propuesta de desarrollo alternativo. Es un análisis de la región desde la perspectiva de la economía política, en la que se considera la forma en que la coca ha invadido los aspectos cotidianos del sur de Bolívar. A partir de este análisis se intenta construir unas líneas programáticas de acción que, con la participación de las instituciones nacionales, podrían permitir remover algunas de las barreras que han servido para alimentar el «negocio del narcotráfico».

Ingemar Cederberg
Encargado de Negocios
Embajada de Suecia

El trabajo aquí presentado, se desarrolla simultáneamente con la primera fase del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, en un momento en el que se avanza hacia la consolidación de un proceso social iniciado por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Este proceso, en palabras de su Director, se inspira en principios como *“la creación de una región definida hacia el futuro como un territorio donde la vida humana sea respetada, nadie sea excluido, la violencia política termine, la pobreza se acabe mediante la ocupación productiva del territorio por los propios pobladores, la mujer salga de la situación de sometimiento y desigualdad tradicionales, y donde se alcance un desarrollo humano integral y sostenible en armonía con la naturaleza que articule a los ciudadanos participantes con instituciones democráticas sin corrupción ni impunidad que pongan en primer plano la seguridad personal de cada uno de los pobladores”*.

Estos principios se constituyen además en retos, si se analiza la situación del sur de Bolívar teniendo en cuenta la incidencia de los cultivos de uso ilícito en todos los aspectos de la vida de los pobladores de esta importante región del país, escenario de referencia para dar una mirada analítica a la problemática social colombiana.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo su mandato de promover el desarrollo humano sostenible, aceptó la invitación del gobierno de Suecia, a través de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de llevar a cabo un trabajo de investigación que desde la mirada de los pobladores y principales actores institucionales del sur de Bolívar, recogiera sus percepciones sobre la manera en que las actividades relacionadas con la producción de la coca han permeado cada uno de sus espacios cotidianos, originando profundas transformaciones en los ámbitos social, económico, político, ambiental y en términos de la dinámica misma del conflicto en la región. El estudio permitió además proponer algunas líneas de acción política, recomendaciones para la definición de estrategias de intervención que ya han sido tenidas en cuenta para avanzar en el desarrollo del Laboratorio de Paz promovido por la Comisión Europea.

Es importante destacar los aportes que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito realizó al documento. Su apoyo nos permitió incorporar algunos elementos relativos al desarrollo alternativo que se enmarcan tanto en las tres convenciones internacionales de las Naciones Unidas sobre los Principios Rectores de la Reducción de las Drogas, como en otras importantes declaraciones internacionales.

También es importante señalar que en el sur de Bolívar el proyecto de desarrollo alternativo de las Naciones Unidas liderado por UNODC viene poniendo en práctica los principios rectores e integrales de las convenciones internacionales, que buscan asegurar la sostenibilidad de los procesos de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. Esta sostenibilidad está basada en varios aspectos, entre ellos: crear alianzas estratégicas con el sector privado para amplificar los resultados del desarrollo alternativo; la recuperación del tejido social rural y la formación de capital social y humano.

Un elemento que no podemos dejar de valorar en los proyectos de desarrollo alternativo en el sur de Bolívar es el trabajo coordinado y concertado entre diferentes entidades como la Asdi, UNODC, el PNUD, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la FUPAD, entre otros.

Estoy seguro que los resultados y conclusiones del estudio que aquí ofrecemos sobre el sur de Bolívar permitirán conocer mejor los daños que los cultivos ilícitos vienen generando sobre la sociedad, la economía y el medio ambiente colombiano, así como replicar las experiencias aleccionadoras y determinar dificultades para no ser replicables en otras áreas del país.

Alfredo Witschi-Cestari
Representante Residente Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sobre los AUTORES

DANIEL FONSECA PÉREZ

Biólogo de la Universidad Javeriana, con especialización y maestría en planificación rural en el Centro de Altos Estudios Agronómicos del Mediterráneo – Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. Está vinculado al área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha participado en proyectos de investigación en los campos de entomología médica, desarrollo rural y restauración de zonas áridas, así como en la formulación de proyectos para la conservación de la diversidad biológica en zonas como el Macizo Colombiano, el Área de Manejo Especial La Macarena y la región de influencia del Desierto de la Tatacoa.

ÓMAR GUTIÉRREZ LEMUS

Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo. Trabajó en el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y se desempeñó como asesor en la formulación del primer Laboratorio de Paz. Es asesor externo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha realizado consultorías e investigaciones sobre conflicto armado con el apoyo del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, y sobre desplazamiento forzado y posesión de tierras en el Magdalena Medio para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur).

ANDERS RUDQVIST

Sociólogo del Colegio de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Uppsala, Suecia. Se ha especializado en desarrollo participativo, investigación-acción participativa y en monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo. Vinculado a Colombia desde 1971 como investigador en temas de sociología rural e investigación histórica, ha trabajado en proyectos de desarrollo rural e investigación-acción participativa con movimientos campesinos. Fue miembro del equipo técnico del Banco Mundial para el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Participó como experto en la comisión europea para la identificación y formulación del segundo Laboratorio de Paz en Colombia, así como en el desarrollo del marco de cooperación entre el PNUD y el gobierno colombiano enfocado hacia la prevención, recuperación y rehabilitación en el ámbito territorial. Actualmente dirige el Foro Colombia de la Universidad de Uppsala, un programa de investigación e intercambio académico apoyado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional, Asdi.

Introducción

Como resultado de la preocupación en torno a la problemática de los cultivos de uso ilícito en el sur de Bolívar y de su profunda incidencia sobre los aspectos de la región, la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio -CDPMM- preparó una iniciativa para realizar un censo sobre la extensión de los cultivos de coca allí presentes. Esta iniciativa también buscaba identificar y formular una estrategia que a través de la promoción de proyectos productivos y bajo un enfoque de desarrollo alternativo estimulara la erradicación voluntaria de los mismos. Sin embargo, esta visión se transformó como respuesta a ciertos hechos que se viven en la región, entre ellos la agudización de la crisis humanitaria, la intensificación del conflicto armado, el incremento en la superficie cultivada con coca, la preocupante vinculación de la comunidad a las actividades relacionadas con el cultivo y transformación de la coca, y la crisis regional que se sufre como consecuencia de la quiebra de la economía rural y agraria por la que atraviesa el país. Así mismo, fue muy importante el interés manifiesto de algunos campesinos y colonos de iniciar procesos de erradicación voluntaria a cambio de propuestas concretas de sustitución de los cultivos de uso ilícito.

Para la realización del estudio se partió de una serie de supuestos formulados por la CDPMM y revisados por el equipo de investigación. Estos supuestos respondían más al interés de realizar un análisis de la economía política de la región del sur de Bolívar frente a la problemática de la alta presencia de cultivos ilícitos, que a la formulación de una propuesta de desarrollo alternativo. En este sentido, se pretendió abarcar y comprender las distintas dimensiones sociales, económicas, culturales y políticas de un fenómeno ilegal que domina el paisaje de las diversas zonas rurales marginadas del país, y que ello sirviera para plantear salidas perdurables, participativas y democráticas a la problemática. Así se quería avanzar hacia bases más firmes en el proceso de planificación operativa y estratégica del Laboratorio de Paz en el sur de Bolívar.

Se pensaba que la visión planteada para promover el desarrollo alternativo tenía como elemento central la búsqueda de soluciones para lograr la erradicación de los cultivos ilícitos, justificando como "población objeto" a quienes estaban directa-

mente implicados con las actividades del cultivo de ilícitos. Esta característica del desarrollo alternativo fundada, además, en una justificación de promoción del desarrollo local generalmente "introducía" como elementos exógenos una suerte de proyectos que se centraban en actividades productivas de carácter agropecuario, sin mayores consideraciones sobre el desarrollo de las condiciones que habían hecho efectivo el funcionamiento de esta economía ilícita en la acumulación de valor y de recursos de distinto orden (sociales, políticos, culturales). Este contexto había servido para estimular procesos migratorios voluntarios, al atraer a la población a las nuevas zonas objeto de programas de desarrollo alternativo que, en algunos casos, buscaban beneficiarse de la situación de ilegalidad. Todo lo anterior generaba condiciones de desarraigo que dificultaban aún más la cimentación de procesos de construcción y recuperación de lo público.

Para tener una aproximación más cercana a la percepción subjetiva de los actores implicados en esta problemática se ensayó una metodología participativa para ponerla en práctica directamente en las zonas productoras de coca. Ciertamente, el trabajo se realizó mediante la aplicación de técnicas de investigación cualitativa (entrevistas selectivas, entrevistas colectivas, conversatorios) con el apoyo, consulta y participación tanto de miembros de la comunidad como de instituciones municipales y organizaciones gremiales, entre otros. Esta labor fue precedida de una revisión de fuentes secundarias (otros estudios, información de prensa) y la elaboración de programas de salidas de campo, acordadas con la CDPMM. Luego se adelantó una sistematización de la información primaria y se construyeron algunas hipótesis explicativas de la problemática, teniendo como marco teórico de referencia las elaboraciones de algunos autores sobre la sociología rural y la economía política. La idea central de este trabajo fue plantear, con la mayor complejidad posible, la situación social, política y económica existente alrededor del fenómeno de la expansión de los cultivos ilícitos.

Como parte del ejercicio realizado al inicio de la investigación y como resultado del análisis de la propuesta presentada por la CDPMM se definieron algunos supuestos de carácter metodológico y político que sirvieron para preparar las propuestas que aparecen al final del documento. Esperamos que estas propuestas sirvan efectivamente para una más eficaz intervención del Laboratorio de Paz y se consoliden como políticas públicas de diferentes instituciones y organizaciones en el ámbito regional y local. Ello sin duda alguna requiere la participación y el compromiso de las instituciones del orden nacional y regional, toda vez que los Laboratorios son propuestas del Estado colombiano apoyadas por la Unión Europea.

Los autores

Supuestos

Dada la poca efectividad de los diferentes enfoques aplicados para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos con opciones diferentes a la fumigación aérea^{1,2}, este estudio intentó formular un marco de referencia para la cooperación internacional desde la perspectiva situacional de los implicados.

La coca ha facilitado y acelerado ciertos procesos de integración y modernización de la economía en el sur de Bolívar. Los recursos generados por esta actividad, especialmente en su fase de transformación (de la hoja en pasta y de la pasta en cocaína) y comercialización, han permitido una acumulación de capital que facilitó el incremento de fortunas personales o benefició tanto a organizaciones productivas y partidos o movimientos políticos, como a grupos armados. Además, la coca ha contribuido a mejorar las condiciones materiales de vida de los colonos y campesinos más pobres dado que les ha permitido, individualmente, el acceso a servicios de salud, educación, vivienda, esparcimiento y créditos. Con todo, este hecho no puede ser generalizado dado que persisten altos niveles de pobreza social. Desde esta perspectiva, la coca reproduce la lógica histórica de otros ciclos y circuitos económicos (quina, petróleo, oro, madera, marihuana) que han permitido la vinculación de la zona a mercados tanto regionales como internacionales³.

Por esta razón una de las hipótesis de trabajo se sustentó en el hecho de que es necesario el compromiso local soportado en organizaciones sociales e instituciones que transformen las políticas de gobierno en políticas de Estado. Esto implicaría,

¹ Es necesario aclarar que cuando se inició el presente trabajo existía una firme decisión por parte del gobierno y la Embajada de los Estados Unidos de iniciar fumigaciones aéreas en las zonas con cultivos de coca en sur de Bolívar.

² La Declaración de Feldafing, llama la atención sobre el hecho que los efectos del uso indebido, el tráfico y la producción de drogas ilícitas se ha convertido en un tema cada vez más preocupante para los gobiernos y la sociedad civil, generando a su vez políticas antidrogas que en sí mismas pueden haber tenido resultados perjudiciales.

³ Estas bonanzas cíclicas han tenido las características limitantes para el desarrollo de las economías de enclave.

entre otros aspectos, que de las acciones represivas se pasara a programas de desarrollo que promovieran la organización social, la construcción de lo público y la consolidación de lo productivo desde una perspectiva regional. Una condición adicional puede ser el planteamiento y ejecución de programas sostenidos a mediano y largo plazo, acompañados de una pedagogía que se dirija a transformar sistemáticamente las condiciones y actitudes que conducen al cultivo de coca y que constituyen obstáculos para su transformación.

Entonces, los programas de desarrollo en zonas con alta presencia de cultivos ilícitos deberían dirigirse a enfrentar las causas de la enfermedad⁴; de allí la necesidad de planes de acción con una visión integral de la problemática que se inicien con un compromiso familiar y se concreten en acciones colectivas que eleven la competitividad y la gobernabilidad democrática en la región. Esto toma mayor importancia en el sur de Bolívar, un territorio con problemas de estabilización poblacional (receptor y expulsor de personas desplazadas) y de aislamiento geográfico pero que, con todo, tiene hoy un carácter estratégico en el conflicto armado y en el crecimiento económico del Magdalena Medio.

Cabe anotar que el auge de los cultivos de coca no precede sino que ocurre inmediatamente después de la intensificación de la lucha por el control territorial y los recursos económicos entre los grupos armados y sirve como instrumento para facilitar este control. Antes de 1998, la economía de la coca en el sur de Bolívar era relativamente marginal, si se la compara con otras zonas del país, y no existían grandes plantaciones (mayores de 10 hectáreas). Sin embargo, la ofensiva paramilitar trajo consigo la proliferación de estos cultivos no sólo en las partes altas de la Serranía de San Lucas sino en zonas planas cercanas a las cabeceras municipales. Incluso se puede afirmar que se dio un repoblamiento de algunos municipios del sur de Bolívar (San Pablo, Santa Rosa y Morales) ante la perspectiva del auge de la coca, en el mismo momento en que era más fuerte el enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares. Las personas recién llegadas del norte de Bolívar, Cesar, Córdoba, Tolima y Putumayo eran colonos, recolectores y proletarios agrícolas que buscaban nuevas formas de subsistir frente a la crisis de la agroindustria; con ellos también llegó el conocimiento artesanal del procesamiento del alcaloide.

Entre 1999 y 2001 se vivió una relativa bonanza de la producción de coca en el sur de Bolívar solamente afectada por la congelación de los precios de la base de coca al productor y por las fumigaciones con glifosato en las plantaciones. Estos hechos provocaron una crisis alimentaria debido a que también se fumigaron cultivos cam-

⁴ Ver PNUD. *Informe nacional de desarrollo humano 2003. El callejón con salida*. Capítulo 13.

pesinos, lo que presionó el desplazamiento de población en muchos corregimientos. Además, la continua amenaza de nuevas fumigaciones y el endurecimiento de las condiciones de compra de base de coca y abastecimiento de precursores químicos han inducido a muchos pequeños y medianos productores a replantearse su vinculación con las actividades ilícitas; sin embargo, al no recibir propuestas de sustitución-compensación efectivas, estos productores prefieren mantenerse en el negocio aunque sus condiciones sean desventajosas frente a otros participantes en la cadena económica.

Los campesinos del sur de Bolívar reclaman mayor y permanente presencia institucional. Una presencia que abra espacios de participación en la formulación y ejecución de las políticas nacionales que los afectan. Reclaman además presencia real y simbólica de las instituciones para poder dialogar y sentirse parte de ellas. Esto es lo que se percibe detrás de muchos de sus pronunciamientos, fundamentalmente cuando se refieren al acceso a la tierra o a su reconocimiento como ciudadanos, sujetos de deberes y derechos, miembros de la comunidad política nacional.

Con el predominio territorial y con la subordinación de algunos procesos políticos a sus estrategias, los grupos paramilitares han asegurado también el control sobre el circuito de producción, transformación y comercialización regional de la base de coca. Este control es ejercido con mayor eficacia que la alcanzada por los carteles de Medellín y Cali en la década de 1980. La guerrilla también controla importantes zonas rurales e interviene en la compra de base de coca. En consecuencia, regionalmente esta situación se manifiesta en la tendencia a un "duopsonio"⁵ protagonizado por los grupos armados ilegales⁶. Es muy probable que por fuera de la región el número de grandes compradores de base de coca y procesadores de cocaína sea mayor; con todo, sigue siendo un mercado muy controlado que podría asumir la forma de oligopsonio u oligopolio.

Revisión de los planteamientos de la propuesta

Desde tiempo atrás, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio - PDPMM- tenía la intención de realizar un estudio sobre la economía ilícita de la coca que sirviera de base para formular proyectos de desarrollo participativo en el sur de Bolívar. Esta economía había sido identificada como una "dinámica perversa" que

⁵ Se utiliza este término en vez del de monopsonio ya que fundamentalmente dos actores distintos (guerrillas y paramilitares) tienden a monopolizar las compras de hoja y base de coca en el ámbito regional. Por fuera de este ámbito y en otras fases de la cadena de comercialización y producción pueden actuar como carteles u oligopolios.

⁶ Otros grupos menores, provenientes de Aguachica y Bucaramanga, han intentado comprar base de coca en el sur de Bolívar pero han tenido poco éxito debido al control establecido por los paramilitares y la guerrilla.

debía ser transformada a través de un esfuerzo colectivo y público en una “dinámica virtuosa” que permitiera la vinculación digna y favorable de la economía campesina a la institucionalidad política y a los mercados locales y regionales.

Así, la propuesta sobre la cual se planteó realizar la presente investigación fue hecha por la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y luego se sometió a revisión, con el fin de ajustar sus objetivos, alcances y metodología a las necesidades concretas del momento en que se comenzaría el estudio.

Inicialmente se fijaron como objetivos de la propuesta: i) la elaboración en forma participativa con la sociedad local de una propuesta que permitiera establecer, en líneas generales, el impacto de la coca en el sur de Bolívar en lo ambiental, social, político y económico; ii) determinar el porcentaje de participación de pequeños productores en la cadena de siembra, transformación y distribución de la coca, así como de la población de “raspachines” y su representación en el total de la coca en la región.

Dadas las características de un negocio ilícito como el de la coca y la existencia del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI)⁷, se desestimó la propuesta inicial de realizar un censo cocalero en sur de Bolívar y la formulación de una propuesta de desarrollo alternativo^{8,9}, en cambio se definieron criterios de elegibilidad

⁷ Sistema de Información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Gobierno de Colombia (Dirección Nacional de Estupeficientes) a través del cual desde 1999 se realizan las estimaciones de la presencia de cultivos ilícitos en Colombia

⁸ ONU, 1998. Entre las medidas de fomento de la cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas de la Declaración sobre los Principios Rectores de la Reducción de la Demanda de Drogas, se define el desarrollo alternativo como un proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito de plantas que contengan estupeficientes y sustancias psicotrópicas mediante la adopción de medidas de desarrollo rural expresamente concebidas con tal fin. Se lleva a cabo en el contexto de un crecimiento económico nacional sostenido y de los esfuerzos por alcanzar un desarrollo sostenible de los países que están tomando medidas contra las drogas, teniendo presentes las características socioculturales especiales de las comunidades y grupos destinatarios, y en el marco de una solución permanente y global de la problemática de las drogas ilícitas.

⁹ DNP, 2003. El Programa de Desarrollo Alternativo se enmarca en el plan nacional de desarrollo “Hacia un Estado comunitario” y contempla la estrategia de combate a las drogas ilícitas, y en particular la erradicación de cultivos ilícitos, la cual es prerrequisito para el acceso al programa. Se basa en políticas sectoriales de desarrollo rural y sostenibilidad ambiental. Contempla el establecimiento y promoción de proyectos productivos y de generación de ingresos, el desarrollo del Programa Familias Guardabosques, el fortalecimiento institucional, desarrollo social y monitoreo. El programa se enmarca además en la estrategia de combate a las drogas ilícitas que busca desarticular las diferentes fases de la cadena y aumentar la eficacia de los mecanismos de interdicción sistemática, fortalecer las acciones de control de los cultivos ilícitos a través de la erradicación e impulsar la extinción de dominio de bienes provenientes del tráfico de drogas.

de las áreas de trabajo de campo, tanto con la comunidad como con el equipo de la CPDMM.

A partir de las expectativas de la comunidad se establecieron unas líneas programáticas para promover acciones que puedan viabilizar el desarrollo integral, entre otros, en el marco de implementación del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio¹⁰ y la participación tanto del gobierno nacional, departamental y local, como de las organizaciones de base presentes en el sur de Bolívar.

¹⁰ El Laboratorio de Paz del Magdalena Medio es una iniciativa apoyada por la Unión Europea; inició actividades en el 2002 y tiene por objeto avanzar, en el Magdalena Medio, en la defensa de los derechos humanos integrales de sus habitantes y en la senda del desarrollo humano sostenible para contribuir a la convivencia ciudadana, al fortalecimiento del diálogo y a mostrar caminos eficaces y viables en la resolución del conflicto. Busca, además, consolidar procesos socioeconómicos, culturales y políticos encaminados a construir la paz y el desarrollo humano sostenible en el Magdalena Medio, mediante el apoyo o puesta en marcha de un conjunto articulado de proyectos participativos en cultura de paz y derechos humanos integrales, actividades productivas, infraestructuras sociales y comunales y fortalecimiento de la gestión pública, en los departamentos de Bolívar (municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, Regidor, Río Viejo, San Pablo, Santa Rosa del sur y Simití), Santander (municipios de Barrancabermeja, Puerto Parra, Puerto Wilches y San Vicente de Cucurí) y Antioquia (municipio de Yondó).

Los “empresarios” locales de la coca

Como se dijo, en el sur de Bolívar existe un grupo de grandes cultivadores de coca con plantaciones hasta de 40 hectáreas. Según las entrevistas realizadas a algunos pobladores, los grandes productores de coca estarían localizados principalmente en las zonas planas de Simití y San Pablo⁷⁸ y en las partes más altas e inaccesibles de la Serranía de San Lucas⁷⁹. Se supone que estos productores son propietarios de laboratorios de procesamiento del alcaloide y tienen una estrecha relación con los narcotraficantes y los grupos de autodefensas:

[...] A esta parte del sur de Bolívar está llegando mucho cachaco de la zona de Aguachica y Ocaña. [...] Esta gente está financiando los cultivos; pero hay algo interesante: la forma como los financian. A los cultivadores los están financiando con comida y eso permite que ellos pongan la mano de obra. [...] Hay alguien que pone la mano de obra y alguien que lo financia; entre ellos existe una relación de confianza muy buena. [...] Es gente común y corriente que está en un negocio; cada cual se está defendiendo. La gente está metida en el negocio porque realmente ve una posibilidad de vivir y tiene la posibilidad de ser, digamos, competitivos en el establecimiento de la región⁸⁰.

Estos medianos y grandes cultivadores se han sustraído voluntariamente de los programas de desarrollo alternativo porque, al decir de muchos, lo que ofrecen las instituciones no representa ningún atractivo para ellos. La rentabilidad de su actividad es tan alta que resiste los efectos de eventuales fumigaciones y supera ostensiblemente

⁷⁷ En los corregimientos de Monterrey y San Blas.

⁷⁹ En algunos sectores de Santa Rosa como Villa Flor, San Juan y los Canelos. Algunas personas aseguran que los grandes cultivos se han trasladado a territorio de Tiquisio y al valle del Bajo Cauca.

⁸⁰ Palabras de un habitante de Río Viejo.

los beneficios que obtendrían de cualquier proyecto institucional. Además, muchos de ellos serían oriundos de otras regiones y tendrían como único interés la inversión de capital para la producción de cocaína, aunque esto suponga abrir bosque en lugares cada vez más apartados de los centros “urbanos” de suministro de servicios.

Por las razones anotadas, este actor fue refractario a las convocatorias para las entrevistas colectivas y los talleres. Se sabe también que además de estar enterados de las iniciativas gubernamentales en materia de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y de negarse a participar en ellas, en ocasiones asumen posiciones desafiantes con quienes se organizan localmente para legalizar sus actividades productivas. Esto es claramente perceptible en San Pablo, Simití y Santa Rosa, donde cuentan con el apoyo de algunos grupos armados ilegales; en otros municipios (Río Viejo y Arenal) incluso están financiando (habilitando) a los pequeños productores para que inicien nuevas plantaciones de coca.

Como en el caso de los traficantes de precursores químicos, la importancia de estos “empresarios” para un proyecto de desarrollo rural es nula y su nivel de influencia sobre el mismo es desconocido. Sin embargo, como ya han demostrado, no se puede descartar que algunos de sus integrantes asuman posiciones francamente hostiles e interfieran en la ejecución de los proyectos financiados por el Laboratorio de Paz u otro programa gubernamental. Se tiene entonces que la motivación de los “empresarios” locales de la coca frente al proyecto PNUD es alta pero negativa o de rechazo y sus actuaciones responderán, en cada situación, al tipo de alianzas o acuerdos que logren con los sectores de gobierno local, los carteles regionales del narcotráfico o los grupos armados ilegales.

Grupos armados ilegales

En el sur de Bolívar se pueden identificar tres grandes grupos armados ilegales. De estos grupos dos son guerrillas de orientación marxista, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). El tercero es un grupo irregular de ideología derechista, el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC – BCB). Los dos primeros tienen una presencia que se remonta a la década de 1970 y el tercero hizo su aparición apenas en 1997.

Tanto las FARC como el ELN entraron al sur de Bolívar en una etapa temprana de poblamiento y comenzaron a regular conflictos particulares entre los colonos, dedicados en esa época a la extracción de madera y de oro (Murillo, 1994). Además, incentivaron la organización social y apoyaron las marchas y paros campesinos sucedidos durante las décadas de 1980 y 1990. Dados estos precedentes, se puede

decir que buena parte de la historia política de los municipios recién creados está ligada de una u otra forma a la presencia de la guerrilla en el sur de Bolívar.

Las AUC hicieron su arribo en 1987 como parte de una estrategia diseñada por el mando central de esta organización⁸¹ y tendiente a desarticular la estructura político-militar creada por el ELN en el sur de Bolívar. Estos grupos recibieron apoyo de los sectores sociales más pudientes (las élites locales) y la clase política regional. Al cabo de estos últimos años las AUC han impuesto su dominio en las poblaciones más importantes (cabeceras municipales y corregimientos).

El Ejército de Liberación Nacional, ELN

Hacia 1972 hizo su aparición el frente "José Antonio Galán" del ELN en la zona rural del San Pablo. Este grupo estaba al mando de Fabio Vázquez Castaño. Más tarde (1978), otro grupo al mando de Manuel Pérez Martínez se estableció en las cercanías de Morales. A partir de la década de 1980 se fundaron en esta misma zona estructuras militares y políticas más numerosas y estables como los frentes "José Solano Sepúlveda" y "Héroes de Santa Rosa".

Hasta 1997, este grupo guerrillero predominó en la mayor parte del territorio del sur de Bolívar y en la cercana ciudad de Barrancabermeja. Con el auge del cultivo de la coca y la ofensiva desatada por las AUC, el poder del ELN entró en una fase de deterioro. Hoy en día cuenta con cerca de 1.200 efectivos y su influencia se limita a las zonas rurales de municipios como Santa Rosa, Morales, San Pablo, Tiquisio, Arenal y Cantagallo.

Para un proyecto de desarrollo es importante tener en cuenta que el ELN adelantó una etapa de negociación con el gobierno de Andrés Pastrana para iniciar un proceso de inserción política e institucional que tuviera como preámbulo la celebración de la llamada "Convención Nacional" en territorio del sur de Bolívar. Un punto destacado de esta Convención era la intención de poner en marcha un ambicioso programa de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y de inversión social para adelantar proyectos de desarrollo alternativo con apoyo de la Unión Europea⁸².

⁸¹ Las AUC se crearon este mismo año como parte de un proceso de centralización y unificación de los grupos paramilitares y de autodefensa; Romero describe así este proceso: "[...] A mediados de esta década (los noventa), los paramilitares y las autodefensas del noroeste de Colombia se empeñaron en centralizar los diferentes empresarios de la coerción opuestos a la guerrilla diseminados por el país, y crearon primero las ACCU en 1994 y luego las AUC en 1997". Ver: Romero, p. 33.

⁸² Para un análisis sobre la posición de este grupo armado respecto al narcotráfico ver Salgado, 2202, p. 32-35.

Al malograrse los acuerdos entre el ELN y el gobierno de Pastrana quedó pendiente la solución de tan delicado tema. Sin embargo, cabe suponer que este grupo insurgente aún guarda interés en participar en las iniciativas de la Unión Europea tendientes a sustituir la economía de la coca y restar poder a las bandas de narcotraficantes, a quienes ha identificado tradicionalmente como sus enemigos.

Sin embargo, en los últimos años este grupo ha realizado alianzas tácticas con las FARC en el Magdalena Medio para enfrentar a los paramilitares. Este hecho ha estado asociado a una posición distinta frente a la producción de coca en sus zonas de control; hoy en día participa en el cobro de tributos a los campesinos cultivadores de hoja y productores de base de coca. En otras palabras, de una posición ideológica bastante contraria al narcotráfico, el ELN ha "revalorizado" el uso de los recursos de esta actividad para efectos de su fortalecimiento militar. Con todo, sus mandos siguen recordando que en 1989 proclamaron un "deslinde categórico" con este fenómeno por considerarlo contrario a la democracia, la paz y el socialismo.

Consideran que algunas de las principales consecuencias del narcotráfico han sido la expansión de la corrupción, la impunidad en el Estado y el fortalecimiento de una "narcoburguesía" que ha ido escalando posiciones en el poder nacional y regional. En sus propias palabras: "el narcotráfico se apoderó del Estado, la economía y la vida social afectando de distintas maneras a toda la sociedad con la pérdida de valores, la introducción de la cultura de la riqueza adquirida de manera fácil y el consumismo, de la violencia y la intimidación como método de resolver las diferencias. En el sector rural, el poder del narcotráfico se hace evidente en fenómenos como la concentración de la tierra, el crecimiento de los grupos paramilitares y el desplazamiento forzado de campesinos. Además, destruye las relaciones comunitarias campesinas y deshace o dificulta la organización de los sectores más pobres y golpeados por la crisis del agro"⁸³.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP

Este grupo ingresó al sur de Bolívar a mediados de la década de 1980. En territorio de Yondó y Cantagallo se implantó el Frente 24; más tarde apareció el Frente 37 en la zona de Arenal y Morales. Estas estructuras hacen parte hoy de los llamados Bloques Magdalena Medio y Caribe. Según fuentes oficiales hay cerca de 2.000 combatientes de las FARC en el sur de Bolívar.

⁸³ Documento del ELN. "La paz y las causas del conflicto armado", sin fecha ni referencia de edición.

De acuerdo con información suministrada por los habitantes, las FARC han incrementado recientemente su presencia en los sectores rurales de municipios como Santa Rosa y Morales. Se trata de una organización fuerte que ha enfrentado con relativo éxito a los paramilitares que han pretendido entrar en sus zonas de influencia. Se sabe además que las FARC facilitan la siembra y cobran "impuestos" a la producción de base de coca en sur de Bolívar.

Por su antigua presencia en zonas productoras de coca y sus orígenes campesinos, las FARC han elaborado una compleja visión sobre el tema del narcotráfico y la producción de coca. Para esta organización, los campesinos productores de coca son víctimas de las crisis económica del sector agrario y de la "contrarreforma" agraria liderada por los narcotraficantes y paramilitares en buena parte del país; es decir, en sentido estricto, estos pequeños productores no serían narcotraficantes y resultaría relativamente fácil desvincularlos del negocio a través de programas participativos y concertados (comunidades, Estado, cooperación internacional) de desarrollo económico y social. Para las FARC, el narcotráfico es algo que toma figura con la intervención de los carteles que procesan la cocaína y exportan grandes cantidades de droga a Estados Unidos, Asia y Europa; igualmente, consideran fundamental la participación de los productores de precursores químicos, los grandes distribuidores de cocaína en los centros de consumo y el capital financiero mundial dentro de este gran circuito ilegal.

En síntesis, para este grupo guerrillero el narcotráfico es un problema del "capitalismo globalizado" y el tratamiento que le han dado los Estados Unidos es ante todo local y afecta, fundamentalmente, a los países productores de América Latina, especialmente Colombia⁸⁴. En sus palabras, la solución del fenómeno pasa por la realización de acuerdos en los que participe "la comunidad nacional e internacional" y se logre "el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes". Por esto rechazan el tratamiento militar y oponen resistencia a los procesos de erradicación forzada de cultivos y a los proyectos de desarrollo alternativo incluidos en el Plan Colombia. Al mismo tiempo, las FARC han propuesto la ejecución de programas pilotos de desarrollo en las zonas productoras de hoja de coca (Cartagena del Chairá) y la legalización de la producción y comercialización de las drogas (Salgado, 2002).

⁸⁴ "Narcotráfico en América Latina y el Caribe" Ponencia presentada por la Comisión Internacional de las FARC-EP. San José, Costa Rica, 18 y 19 de julio de 1997.

Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC

Este grupo comenzó su entrada al sur de Bolívar en 1996 y mantuvo una fuerte ofensiva militar contra los grupos guerrilleros hasta 2001. Tanto desde el norte, Río Viejo y Santa Rosa, como desde el sur, Yondó y Cantagallo, las AUC han intentado desalojar al ELN y a las FARC de sus tradicionales zonas de influencia. Sin embargo, se afirma que la población civil ha sido la principal víctima (asesinatos y desplazamiento forzado) de las acciones de las AUC⁸⁵.

Las AUC han hecho presencia en todas las cabeceras municipales y en numerosos corregimientos del sur de Bolívar. Existe entre los paramilitares y las guerrillas una fuerte disputa por los recursos económicos de la zona (coca y oro) y ambos bandos buscan acceder a los presupuestos municipales por vía de la corrupción y la desviación de recursos de inversión. Además, las AUC controlan el comercio de la base de coca en el sur de Bolívar fijando precios y delegando la compra del alcaloide a personas integrantes de su organización (duopsonio). Hoy en día ofrecen a los productores \$2.100.000 por kilo de base producido y difieren el pago de la mercancía a los plazos que unilateralmente establecen. Este procedimiento ha llevado a una crisis de la economía local de la coca, ya que los productores han demorado más de dos meses en pagar las deudas a los comerciantes y prestamistas.

Se podría decir que en poco tiempo las AUC sustituyeron la tradicional red de compradores y comerciantes de base de coca en el sur de Bolívar e ingresaron al circuito industrial de la cocaína instalando laboratorios de procesamiento del alcaloide. Así, por ejemplo, como preámbulo de las primeras fumigaciones con glifosato, en 2001, el Ejército dismanteló un conjunto de laboratorios en el corregimiento de Simití, con capacidad para procesar 5.000 kilos de base de coca al mes⁸⁶. Además, parece que un gran porcentaje de este producto es llevado a otros municipios de Santander (Río Negro, Puerto Parra, Sabana de Torres o Cimitarra) donde también se han descubierto laboratorios y luego se transporta el clorhidrato de cocaína a los puntos de partida de las rutas internacionales de la droga en la Costa Atlántica.

Sin embargo, hoy el asunto más importante en relación con las AUC es su intención de incorporarse a la vida institucional y productiva de la zona. En lo segun-

⁸⁵ Estos grupos provocaron el más alto número de víctimas civiles en el país durante 2001, calculado en 3406 muertos y 257 desapariciones; esto como parte de infracciones al DIH y a los Derechos Humanos por persecución política. Ver: Cinep & Justicia y Paz. Banco de datos de derechos humanos y violencia política. Noche y Niebla, oct – dic 2001, p. 18-21.

⁸⁶ Ver: periódico El Universal, bajo el título: "Destruyen fortín de las AUC", 17 de febrero de 2001, p. 2A.

do, el Bloque Central Bolívar ha declarado públicamente su intención de intervenir o facilitar procesos de desarrollo regional que posibiliten la superación de la economía de la coca; de hecho se dice que sus integrantes tienen un fuerte interés en invertir recursos ilícitos en proyectos productivos agroindustriales. Así mismo las AUC aspiran a alcanzar su incorporación al orden político a través de una negociación con el gobierno de Uribe Vélez. De materializarse estos hechos acontecerán controvertidos cambios en todo el sur de Bolívar.